

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO N° **782** DE 2023

**“POR EL CUAL SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL CONTENIDO DEL AUTO NO. 996 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022”**

La suscrita Subdirectora de Gestión Ambiental (E) de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., con base en lo señalado en el Acuerdo N° 0015 del 13 de octubre de 2016, expedido por el Consejo Directivo de esta Entidad, en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución N° 000531 de 2023 y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Constitución Nacional, el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 1437 de 2011 reformada por la Ley 2080 de 2021, Decreto 1076 de 2015, Ley 1333 de 2009 y

**CONSIDERANDO**

**ANTECEDENTES SANCIONATORIOS**

Que mediante el artículo primero del Auto No. 173 del 27 de abril de 2021, la Corporación dispuso requerir a la alcaldía Municipal de Soledad, representada Legalmente por el Señor RODOLFO UCROS ROSALES o quien haga sus veces al momento de la notificación, para que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:

“(…)

- *En un plazo máximo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente proveído, inicie las acciones para la clausura, recuperación ambiental y social del botadero “La Concepción”; y se realicen todas las gestiones pertinentes en el marco de sus competencias, a fin de erradicar de forma definitiva este botadero a cielo abierto; se evalúen las alternativas ambientales, de ingeniería y de tipo social para darle una solución de carácter integral a la problemática, con el objeto, de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales sobre los recursos naturales (aire, agua, suelo y flora) generados en este punto crítico obotadero a cielo abierto de residuos.*
- *Informar de la problemática ambiental expuesta a la Gobernación del Atlántico y para que se activen de manera INMEDIATA, los respectivos Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres, con el fin de aunar esfuerzos, a fin de evaluar forma técnica la situación descrita anteriormente, relacionada con la inadecuada disposición final de residuos sólidos y la quema a cielo abierto de los mismos, que se presenta en el punto crítico conocido como BOTADERO LA CONCEPCION. (...)*

Que la Corporación practicó visita técnica con el fin de atender la solicitud al botadero de residuos sólidos a cielo abierto denominado LA CONCEPCIÓN, localizado en el Municipio de Soledad- Atlántico, originándose el Informe Técnico No. 110 del 23 de abril de 2021.

Que mediante el artículo primero del **Auto No. 765 del 3 de octubre de 2022** (notificado el día 7 de octubre de 2022), la Corporación dispuso iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del municipio de Soledad-Atlántico identificado con NIT. 890106291-2 a través de su representante legal o quien haga sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones ambientales requeridas mediante Auto No. 173 del 27 de abril de 2021.

Que igualmente, mediante el artículo primero del **Auto No. 996 del 21 de diciembre de 2022** (notificado el 26 de diciembre de 2022), la Corporación dispuso iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del municipio de Soledad-Atlántico identificado con NIT. 890106291-2 a través de su representante legal o quien haga sus

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO N° **782** DE 2023

**“POR EL CUAL SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL CONTENIDO DEL AUTO NO. 996 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022”**

veces, bajo la misma motivación y hechos que direon origen al Auto No. 765 del 3 de octubre de 2022.

**COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A**

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza jurídica de las Corporaciones como entes “...*encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrolla Sostenible...*”.

Que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, enumera como una de las funciones a cargo de las Corporaciones Autónomas regionales, “ *Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados*”.

Que de conformidad con el artículo 32 de la precitada Ley, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico es la autoridad ambiental del Departamento del Atlántico.

Que el inciso tercero del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, menciona que “...*las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objetos de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...*”.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993.

**CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL**

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia establece que “*es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación*”.

Que el artículo 29 ibidem, establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, previendo especialmente:

*“...que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

*En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.*

*Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO N° **782** DE 2023

**“POR EL CUAL SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL CONTENIDO DEL AUTO NO. 996 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022”**

*controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*

*Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso...”*

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia establece la función social de la propiedad privada, la cual implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Que el artículo 79 y 80 ibidem, consagran fines y deberes específicos del Estado relacionados con la protección, preservación y conservación del ambiente, señalando que *“...es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines...”*; que *“...el Estado tiene un especial deber de protección del agua...”*; así como también mencionan, que el Estado deberá planificar *“...el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución...”*.

Que según el numeral 8. del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, es deber de la persona y del ciudadano *“proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”*.

Que, a su vez, el artículo 209 de la Constitución señala que, *“la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad moralidad eficacia celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”*

Que el artículo 1 del Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, consagra que, *“el ambiente es patrimonio común”*, y que *“el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”*, así como también prevé que, *“la preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social”*.

Que el inciso 3 del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, estableció que: *“las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objetos de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...”*

Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la ley 99 de 1993.

Que, las sanciones de que trata la Ley 1333 de 2009 solamente podrán ser impuestas por la Autoridad Ambiental competente, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio ambiental, con base en el cual se deben iniciar las respectivas investigaciones por parte de la autoridad ambiental, e imponer de ser el caso, las medidas preventivas y sanciones a que haya lugar.

Que, de manera concluyente, el ambiente se define como un patrimonio común, y por ende el Estado y la sociedad, se encuentran obligados a garantizar su protección, pues se deriva

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO N° **782** DE 2023

“POR EL CUAL SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL CONTENIDO DEL AUTO NO. 996 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022”

de la efectividad de dicho deber, la posibilidad de permitir a generaciones presentes y futuras su propia existencia en condiciones de dignidad y seguridad, a través de un ambiente sano.

Que es necesario aclarar, que no obstante haber entrado a regir el 2 de julio de 2012, la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, su artículo 308, prevé:

*“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”* (Subrayado fuera de texto)

Que así las cosas, la presente actuación se seguirá adelantando conforme a lo previsto en la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

Que de acuerdo a lo anterior, es necesario revisar la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos, la cual encuentra su regulación a partir del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, así:

“(…)

*Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.*

(…)” (Subrayado fuera de texto)

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-742 DE 1999- Magistrado Ponente Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo, considero lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:

*“(…) La revocatoria directa tiene un propósito diferente: al de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. (...)”*

Que igualmente la misma Corte Constitucional en Sentencia T-033 de 2002, Magistrado ponente Dr. Rodrigo Escobar, ratificó el anterior argumento de la siguiente manera:

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO N° **782** DE 2023

**“POR EL CUAL SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL CONTENIDO DEL AUTO NO. 996 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022”**

*“(…) Para la Corte, la revocatoria directa tiene una naturaleza y un propósito diferente al de la vía gubernativa, pues la primera comporta un auténtico privilegio para la Administración, como titular del poder de imperium del Estado y gestora del interés público de eliminar del mundo jurídico sus propios actos por considerarlos contrarios a la Constitución y la ley. De ahí, que esta Corporación haya declarado que tal facultad consiste en “dar a la autoridad la oportunidad de corregir por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. (…)”*

Que en relación con la revocación, el Profesor Luis Enrique Berrocal Guerrero, en su obra “Manual del Acto Administrativo”, tercera edición, 2004, enseña que una de las causales de su procedencia es:

*“QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO CAUSE AGRAVIO INJUSTIFICADO A UNA PERSONA. Entendiendo el agravio como el perjuicio que se le hace en los derechos e intereses a alguien, éste da lugar a la revocación directa cuando sucede sin razón, motivo o fundamento alguno; es decir, cuando no tiene justificación alguna. Por lo tanto, implica ante todo un juicio de mérito, que es un tipo de juicio jurídico, pero cuyo mayor énfasis está en verificar si el perjuicio que el acto administrativo le produce a una persona tiene o no justificación en las circunstancias que sirven de fundamento al acto.”*

Que analizando las anteriores sentencias, en éstas se hace un gran énfasis en las causales que señala el artículo 93 del CPACA, y es en este sentido en que se pone una limitante expresa dentro del texto del articulado jurídico que señala un lineamiento bien claro en el cuándo y el cómo ha de proceder la administración frente a determinados casos cuando se dé la revocatoria directa del acto administrativo.

Que la revocatoria directa de los actos administrativos, tiene como pretensión la de dejar sin efectos jurídicos a un acto administrativo desde el nacimiento mismo en que pretendió producir efectos ya sea, modificando, extinguiendo o suprimiendo derechos subjetivos o intereses legítimos.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo 3° que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

#### **CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO EN CONCRETO**

Que como se mencionó previamente, mediante el artículo primero del **Auto No. 765 del 3 de octubre de 2022**, (notificado el día 7 de octubre de 2022), la Corporación dispuso iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del municipio de Soledad-Atlántico, e igualmente, mediante el artículo primero del **Auto No. 996 del 21 de Diciembre de 2022**, la Corporación dispuso nuevamente iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del municipio de Soledad-Atlántico, bajo las mismas circunstancias y motivación del **Auto No. 765 del 3 de octubre de 2022**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO N° **782** DE 2023

**“POR EL CUAL SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL CONTENIDO DEL AUTO NO. 996 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022”**

Que así las cosas, es claro que a través de **Auto No. 765 del 3 de octubre de 2022**, ya se había iniciado un proceso sancionatorio ambiental bajo los mismos hechos, consideraciones y recomendaciones del informe técnico No. 110 de 2021, el cual, por ser primero en el tiempo es primero en el derecho, y como consecuencia de ello, es el que debe persistir en la vida jurídica.

Que en ese sentido y con el fin de garantizar el debido proceso, puesto que de lo contrario existiría duplicidad del trámite sancionatorio, lo que repercute en la violación fehaciente del principio general del derecho *non bis in idem*, consistente en la prohibición de juzgar y sancionar dos veces por el mismo hecho o infracción en procesos de la misma naturaleza; resulta pertinente acudir al artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, normatividad aplicable al presente caso, en lo que respecta a la revocatoria directa del **Auto No. 996 del 21 de diciembre de 2022**, siendo que dicha norma es una prerrogativa que tiene la administración pública para ejercer auto control de legalidad de sus actuaciones administrativas, y de esta manera enmendar en forma directa o a petición de parte, aquello que no haya sido ajustado a derecho, es decir cuando dichas actuaciones sean contrarias a la Constitución o a la ley, atenten contra el interés público o social, o generen un agravio injustificado a una persona.

Que respecto al debido proceso, la Corte Constitucional, se ha pronunciado en diferentes oportunidades, encontrando dentro de éstos, los descritos a continuación:

*“(...)*

*“El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.”*

*“El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria. Algunas de las reglas constitucionales que configuran este derecho son de aplicación inmediata y anulan cualquier norma que los limite o restrinja (...).”*

Que la Corporación estima que, de acuerdo con lo expuesto en el presente acto administrativo, se establecen argumentos para declarar la revocatoria del **Auto No. 996 del 21 de diciembre de 2022**, los cuales poseen sustento legal y, por ende, son de recibo en el presente caso al configurarse la causal tercera del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Que en virtud del principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

**DISPONE**

**PRIMERO: REVOCAR** en su integridad el **Auto No. 996 del 21 de diciembre de 2022**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A.

AUTO N° **782** DE 2023

**“POR EL CUAL SE REVOCA EN SU INTEGRIDAD EL CONTENIDO DEL AUTO NO. 996 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022”**

**SEGUNDO: CONTINUAR** con el proceso sancionatorio ambiental iniciado mediante **Auto No. 765 del 3 de octubre de 2022** en contra del Municipio de Soledad, Atlántico.

**TERCERO: NOTIFICAR** en debida forma el contenido del presente acto administrativo al municipio de SOLEDAD- ATLÁNTICO, identificado con NIT. 890106291-2, a través de su representante legal o quien haga sus veces, el contenido del presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y numeral 1º del artículo 67 de la ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, y demás normas que la complementen, modifiquen o sustituyan.

Para efectos de lo anterior, las respectivas notificaciones se realizarán en la dirección Calle 41 No. 17-27 Barrios La Ilusión, correo electrónico [alcaldia@soledad-atlantico.gov.co](mailto:alcaldia@soledad-atlantico.gov.co) , [ofijuridicanotificaciones@soledad-atlantico.gov.co](mailto:ofijuridicanotificaciones@soledad-atlantico.gov.co)

En caso de imposibilitarse lo anterior se procederá a notificar conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

**CUARTO:** Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Barranquilla a los

**31 OCT 2023**

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**BLEYDY MARGARITA COLL PEÑA**  
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)

EXP. 2009-036

*Proyectó: Manuela Uhía- Contratista Gestión Ambiental.-*

*Proyectó y supervisó: Yolanda Sagbini - Profesional Especializado Gestión Ambiental.-*

*Aprobó: María José Mojica – Asesora Externa Dirección.-*